

La cultura política del radicalismo chileno en clave de revolución pasiva

Alberto Aggio
UNESP

Resumen: Este artículo analiza la experiencia histórica del Frente Popular en Chile, que fue dirigida por el Partido Radical, una organización partidaria que consiguió vencer en las elecciones presidenciales de 1938 y conducir, incluso una vez desaparecido el Frente Popular en 1941, los gobiernos chilenos hasta 1952. Con el radicalismo en el gobierno, la sociedad chilena viviría profundos cambios que acabarían conviviendo con el poder, todavía vigente, de las clases dominantes. El elemento central de reflexión es el de la cultura política del radicalismo, que se consagró como el actor político de esa dialéctica de cambio/conservación. El referente teórico utilizado está basado en la categoría gramsciana de revolución pasiva, lo que permite, más allá de explicar el periodo, construir un cuadro explicativo de los procesos que marcarán la historia política contemporánea de Chile.

Palabras clave: Frente Popular, radicalismo, revolución pasiva, Chile contemporáneo.

Abstract: This article analyses the historical experience of Popular Front in Chile, led by Radical Party, a party organization which managed to win presidential elections in 1938, and lead even once Popular Front disappeared in 1941, Chilean governments until 1952. With radicalism in government, Chilean society would live deep changes coexisting with power—yet in force—of dominant classes. A main element of reflection is the political culture of radicalism established as the political actor of that change/preservation dialectic. The theoretical reference lies on Gramsci's category of passive revolution and allows not only to explain the period, but to build an explanatory framework of processes which will mark contemporary political history of Chile.

Key words: Popular Front, radicalism, passive revolution, contemporary Chile.

El periodo que se abre en 1938 con la victoria electoral del Frente Popular se cubre de un significado especial en la historia política chilena, ya que se configura como la culminación del proceso de modernización del Estado iniciado en 1920 con la elección del presidente Arturo Alessandri. A partir de esta etapa se dibujó definitivamente un nuevo modelo de la intervención del Estado en la actividad económica y se avanzó en la consolidación de la democracia representativa en el país.

En 1938 cristalizará, por tanto, un cambio histórico que se fue configurando desde las primeras décadas del siglo XX. Desde aquel año y hasta 1952, los gobiernos encabezados por el Partido Radical impusieron y asentaron las bases de un patrón de modernización que se hizo notable en el continente latinoamericano por su singularidad y continuidad, al combinar el desarrollo económico con una extensa y casi siempre ilimitada libertad política, al tiempo que se conectaba la apuesta por la intervención del Estado en la economía con una amplia integración social, muy novedosa para los estándares latinoamericanos¹.

Además de su importancia local, el éxito del Frente Popular en Chile asumió también una significación histórica universal puesto que, junto con Francia y España, Chile fue el único país latinoamericano que conoció la victoria electoral y el establecimiento de un gobierno basado en la política de Frente Popular adoptada por el Movimiento Comunista Internacional (MCI) desde agosto de 1935. Como es sabido, esa estrategia fue definida por la Internacional Comunista (IC) al sostener que era necesario propiciar la unidad de acción entre los comunistas y otras fuerzas políticas con el fin de hacer frente, política e ideológicamente, al fascismo y al nazismo, entonces en ascenso en Europa Occidental². Aunque América Latina figurara como absolutamente secundaria en los propósitos de la IC, en virtud de sus posiciones estratégicas en el Atlántico y en el Pacífico, Brasil y Chile se convirtieron en los pilares más importantes de la deseable extensión en América Latina de la línea política adoptada por el MCI.

¹ Desde 1938 hasta la dictadura que se impuso en 1973, la ilegalización del Partido Comunista Chileno entre 1947 y 1958 fue el único ejemplo de restricción a la libertad política.

² DE FELICE, F.: *Fascismo, Democracia y Frente Popular*, Cuadernos de Pasado y Presente, México, Siglo XXI, 1984.

A pesar de ser cronológicamente posteriores a las experiencias de Francia y de España, las vicisitudes que dieron origen al Frente Popular en Chile fueron, en cierta forma, similares, por surgir también de la necesidad de cimentar una unidad político-social entre los sectores populares, cuyo objetivo era resistir o impedir la instalación de un gobierno represor. De la misma forma que en Europa, el Frente Popular se articuló en Chile como una alianza político-electoral que abrigaba corrientes político-ideológicas más extensas que el espectro formado por la izquierda de matriz marxista. En oposición al segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), marcadamente autoritario y represivo, el Frente Popular chileno se compuso esencialmente por los partidos Radical, Socialista y Comunista que asumieron gradualmente la defensa de la democracia política como fundamento de una coalición de centro-izquierda, aunque en la época fue caracterizada como un agrupamiento genuinamente «izquierdista» por sus adversarios.

Igualmente efímeras, esas tres experiencias gubernamentales de Frentes Populares fueron históricamente decisivas en sus historias nacionales, a pesar de los desenlaces dispares que tuvieron. Como es sabido, el Frente Popular en España se enfrentó al baño de sangre de la Guerra Civil y en Francia terminó en abril de 1938, tras vida breve, por la falta de apoyo parlamentario al gabinete socialista de Leon Blum. En Chile, al contrario que en España, la guerra civil no estallaría. De todos modos, dos años después de su llegada al poder, el Frente Popular ya no conseguiría mantenerse como alianza política de gobierno y en 1941 se rompería irreparablemente aunque, a diferencia de Francia, la ruptura de la coalición de centro-izquierda no significó en Chile el colapso del gobierno iniciado en 1938. Así, sirviéndose del presidencialismo de la Carta Constitucional de 1925, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (electo por el Frente Popular en 1938) prosiguió a pesar de la ruptura de la coalición originaria y su mandato sólo se interrumpió en virtud de su muerte, el mismo año 1941.

Aunque las alianzas electorales y de gobierno posteriores a 1941 hayan sido más amplias y variables que la coalición victoriosa en 1938, su significación aparece ligada al hecho de que la experiencia del Frente Popular proporcionó al país más de una década de gobiernos bajo su inspiración, teniendo siempre a la cabeza a un presidente vinculado al Partido Radical, ya que después de la victoria de 1938 y de la ruptura del Frente Popular en 1941, los radicales ven-

cieron en las dos elecciones siguientes a la Presidencia de la República. En la primera, en 1942, Juan Antonio Ríos encabezaba una coalición amplísima denominada Alianza Democrática y en la segunda, en 1946, Jorge González Videla fue el candidato de la Unión Nacional, alcanzando el poder con un fuerte y explícito apoyo de los comunistas para después llevarlos a la ilegalidad en 1947, con el advenimiento de la Guerra Fría. Con posterioridad a 1938, Videla fue el único presidente radical que terminó su mandato, puesto que Antonio Ríos, al igual que Aguirre Cerda, murió antes de concluirlo. Al final del periodo, el desprestigio del radicalismo como fuerza política gobernante y las divisiones en el seno de la izquierda posibilitarían la elección presidencial del ex dictador Carlos Ibáñez del Campo en 1952³.

Compuesto y organizado como un actor político *defensivo*, después de la victoria de 1938, el Frente Popular tuvo obligatoriamente que adoptar una postura más *afirmativa* ya que asumía el papel de actor gobernante. Las circunstancias y la naturaleza del Partido Radical hicieron que buscara concretar esta mutación en el seno de la coalición, a partir del momento en que el radicalismo asumió la hegemonía del Frente Popular y que Aguirre Cerda, expresión de la moderación y de la negociación política, fue designado candidato presidencial de la coalición. Dentro del Frente Popular estos dos hechos acentuaron el papel conciliador de los radicales, que se presentaban como defensores del consenso respecto al objetivo táctico que representaba la defensa del régimen democrático y constitucional, a pesar de toda la retórica de ruptura esgrimida por los partidos de izquierda. Programa, candidato y campaña asumieron un mismo tono y una misma dirección en los siguientes ejes: el mantenimiento de la democracia, el perfeccionamiento de la legislación social, el crecimiento de la economía nacional basado en el desarrollo económico, la mayor intervención estatal y, finalmente, el énfasis en la negociación que implicaba la ejecución de este programa. Sin embargo, era de esperar que aquello que las fuerzas políticas del Frente Popular habían asumido como positivo para la construcción, estabilidad y vitalidad de la alianza electoral antes de 1938, es decir, el predominio de los contenidos y

³ Carlos Ibáñez del Campo gobernó dictatorialmente Chile por primera vez entre 1927 y 1931. Electo en 1952, concluiría su mandato en 1958 sin conseguir reproducirse ni política ni electoralmente.

significados expuestos en el programa, se volviera un factor de desunión y ruptura después de haber conquistado el gobierno⁴.

El ascenso al poder del Frente Popular mostró, sin duda, aspectos significativos de continuidad histórica, pero implicaba también una novedad: las fuerzas de izquierda asumieron su institucionalización y comenzaron a influir en la definición de lo que debería o no ser puesto en práctica por el Estado. Después de una década de intensa movilización popular y de ascenso de la izquierda, pasó a imponerse un espíritu de moderación. La victoria del Frente Popular llevó a la izquierda chilena al poder, sin que esto significara —ya se sabía en 1938— una alteración sustancial del orden político y social⁵. Para algunos analistas, desde una visión un poco anacrónica, este hecho implicó un atraso en la radicalización de la política chilena⁶, por lo menos en la forma en que se expresará a partir de los años sesenta. En este sentido, entender todo ese proceso únicamente a partir del viejo paradigma de la «elasticidad» y «flexibilidad» de la cultura política y de las instituciones chilenas o atribuir su éxito a la «adaptabilidad de las elites» y/o a las «concesiones de los marxistas»⁷ nos parece una flagrante limitación del análisis. Por el contrario, entendemos que aquella fue una obra de construcción política y como tal estuvo, varias veces, a punto de no concretarse, antes y después de 1938.

Siguiendo la dinámica del proceso de modernización iniciado en 1920, los gobiernos inspirados en el Frente Popular y conducidos por el Radicalismo pusieron en práctica, por medio de una acción estatal, políticas que posibilitaron la alteración de la fisonomía económico-social del país, sin que ese proceso asumiera una apariencia revolu-

⁴ MILOS, H. P.: *El Partido Radical y el Partido Socialista en la conformación del Frente Popular chileno, 1935-1938*, Santiago, PUC, 1985, p. 441. Esta percepción fue registrada en un libro polémico, BERMÚDEZ MIRAL, O.: *El Drama Político de Chile*, Santiago, Editorial Teguvalda, 1947, que no siempre comprendió precisamente lo que ocurrió y que procuraba tenazmente denunciar la moderación asumida por los radicales a partir de su ascenso al poder.

⁵ LECHNER, N.: *La democracia en Chile*, Buenos Aires, Ediciones Signos, 1970, p. 80. Equívocadamente, Lechner ve en la burocracia el factor de impulso de la continuidad. Sin verificar la complejidad del proceso, para este autor, el Frente Popular «condujo únicamente a un crecimiento formal de la participación política, estabilizando indirectamente la estructura de dominación tradicional» (p. 78).

⁶ Esta tesis es defendida por DRAKE, P.: *Socialismo y Populismo. Chile 1936-1973*, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1992, p. 188.

⁷ *Ibid.*

cionaria. Si los catorce años que siguieron a la victoria electoral de 1938 no deben considerarse íntegramente como un periodo articulado por la línea política del Frente Popular, tampoco pueden ser vistos como algo discontinuo en relación con las fuerzas políticas que asumieron el poder en 1938 o como ajeno a las mudanzas que a partir de aquel momento se labraron.

A partir de ese año la política conciliatoria, flexible y programática del Partido Radical pasó a ser el punto de referencia central en la vida política del país, fortaleciendo las convicciones democráticas del republicanismo chileno. Esto generó, a pesar de las enormes divergencias internas del Frente Popular y de los conflictos latentes con las fuerzas de derecha, un clima de relativo consenso sobre temas como la industrialización o la intervención continua del Estado en la economía. A la cabeza del gobierno, el Partido Radical garantizó una relativa estabilidad del sistema político y no se colocó como un obstáculo a la manifestación y defensa de los intereses de los grupos subalternos, especialmente urbanos. Acomodándose también a las oscilaciones de los otros segmentos políticos, el Partido Radical pudo realizar a lo largo de este periodo (sobre todo después de la desaparición del Frente Popular) alianzas electorales y de gobierno de amplio espectro, ya fuera dirigiéndose más a la izquierda, o a la derecha, de acuerdo con los dictámenes de la coyuntura. No obstante, en general, las alianzas electorales lideradas por los radicales fueron de centro-izquierda ya que, una vez en el poder, los radicales buscaban —y a veces lograban— el apoyo de fracciones de los liberales, de los conservadores y de la Falange Nacional (futuro Partido Demócrata Cristiano). Entre 1932 y 1952 los radicales y los conservadores nunca compusieron alianzas electorales, aunque hubieran participado de algunas alianzas de gobierno al comienzo y al final de este periodo⁸.

Desde una visión general del proceso que comienza en 1938, el consenso al que nos referíamos anteriormente desempeñó un papel mucho más decisivo que el de la naturaleza de las coaliciones llevadas a cabo por las políticas de izquierda o del radicalismo. Por este motivo, el ascenso al poder del Frente Popular, una coalición marcadamente de centro-izquierda, da inicio a un periodo en la historia de Chi-

⁸ SCULLY, T. R.: *Los Partidos de Centro y la Evolución Política Chilena*, Santiago, Cieplan-Notre Dame, 1992, pp. 134-135.

le que no corresponde integral y precisamente a los deseos que expresaban sus bases de apoyo y a las representaciones políticas y sociales que le dieron origen en la coyuntura represiva de 1936⁹. En este sentido, se puede decir que el destino reservado a los actores políticos fundamentales que operaron los cambios emprendidos en aquel periodo no se corresponde con la envergadura de la tarea realizada. Con respecto a la izquierda, aunque las consecuencias de su participación en los gobiernos de coalición hayan sido rápidamente evaluadas como negativas —y esta visión será predominante hasta la década de 1970— se puede decir que, gracias a esta participación, los partidos Comunista y Socialista no sólo lograron asegurar su papel de representantes de los trabajadores organizados, sino que también pudieron aumentar sus bases y su prestigio para, finalmente, actuar como fuerzas prominentes del proceso político nacional, en condiciones de igualdad con los demás partidos. Esto es extremadamente importante porque, además de la experiencia gubernamental, permitió asegurar la autonomía política y organizacional de las clases subalternas en el proceso de modernización que el país viviría a partir de aquel momento. Sin embargo, en el plano económico, en la medida en que una de las bases de su programa era el nacionalismo, podemos decir que la izquierda fue incapaz de influir para promover el desarrollo económico y, al mismo tiempo, disminuir la vulnerabilidad y la dependencia del país con el exterior. En el plano de la ciudadanía, se verificó la imposibilidad de ampliar el electorado nacional y de conseguir extender el proceso de sindicalización al campo, puesto que el ascenso al poder de las fuerzas que se articularon en el Frente Popular no redundó en un proceso de democratización a través de la ampliación del electorado. Así, a finales de la década de 1940, el porcentaje de votantes respecto al conjunto de la población era menor del que se conocía a finales de la década anterior y, si comparamos las elecciones presidenciales de 1932 y de 1946, se verifica que el crecimiento de la participación electoral fue insignificante al pasar del 7,6 al 8,5 por 100¹⁰.

⁹ En aquel año, Alessandri reprimió duramente al movimiento sindical chileno, en especial ante una huelga de obreros ferroviarios. Muchos analistas concuerdan en que los acontecimientos que encubrieron ese conflicto laboral sirvieron de impulso para la adopción de la idea de un Frente Popular en Chile.

¹⁰ AYLWIN, M., *et al.*: *Chile en el siglo XX*, Santiago, Editorial Emisión, 1986, p. 187. El voto femenino fue otorgado en 1949, solamente para elecciones municipales y ya en 1952 se extendió para las elecciones presidenciales.

¿Cómo explicar resultados tan limitados? En primer lugar, es verdad que la correlación de fuerzas no era favorable a la izquierda y que, siendo mayoría en el Parlamento casi en todo momento, la derecha (conservadores y liberales) logró bloquear la implementación de medidas democráticas que formaban parte del programa del Frente Popular. Además, en diversas ocasiones, la derecha demostró claramente a los radicales que sus intereses tendrían preferencia, incluso sobre el mantenimiento de la democracia representativa. La derecha combinó su fuerza parlamentaria con su poderío económico para vetar todo lo que afectaba sus intereses inmediatos, especialmente la sindicalización campesina, y permitir los cambios que exigían los intereses de las organizaciones empresariales acomodando sus potenciales conflictos internos.

En este sentido, manejando la situación política para permanecer siempre con el control de la presidencia de la República, la disposición del Partido Radical en ceder a las presiones de la derecha siguió la lógica de afirmación histórica de este partido. En ella, el tema del *orden* asumía una importancia equivalente al del *cambio*. La afirmación política de las representaciones de la izquierda en función de la estabilización democrática empujó al radicalismo hacia el centro. En esta posición, los radicales podían ofrecer todo a ambos lados del espectro político, siempre que se les asegurara la Presidencia de la República y/o el apoyo para el futuro gobierno. La lectura que los radicales hicieron de esta situación definió con mayor precisión su papel político. Desde entonces, la combinación más eficaz para dar curso a la modernización y garantizar la estabilidad estaba en su propia razón de ser como actor político.

Revolución pasiva: criterio de interpretación

Para comprender la cultura política del radicalismo chileno es importante recurrir a un conjunto de conceptos que permita explicar aquel contexto histórico en toda su complejidad, superando la mera presentación formal de los aspectos puntuales de esa cultura política. En nuestra opinión, el radicalismo chileno se convirtió en una cultura política relevante en la historia chilena por su decisivo protagonismo en la etapa más expresivamente modernizadora de aquello que llamaremos aquí *revolución pasiva chilena*. La categoría de revolución

pasiva, de matriz gramsciana, es el hilo conductor de nuestros parámetros teóricos en las siguientes páginas.

Nuestro argumento se basa en que la definición de pertenencia de América Latina a Occidente instauró en sus sociedades una dimensión inevitable de «traducción» y «traducibilidad» de valores y paradigmas¹¹. Desde un punto de vista analítico, es el reconocimiento de la existencia de un proceso histórico concreto de «occidentalización» de los valores político-sociales, así como de la base económica de la sociedad, lo que posibilita la introducción de la historia latinoamericana en el seno de la metáfora gramsciana que distingue «occidente» y «oriente». En este sentido, «occidente» es fuente de origen de América Latina, así como también proceso y construcción histórica, a partir de la extensión de sus valores racionalistas y seculares.

No hubo, en esta parte del mundo, una cristalización del «orientalismo», como expresión «pura» y «originaria», que sobreviviera al traslado europeo. A partir del siglo XIX, el proceso de «occidentalización» pasa a ser una de las marcas esenciales de nuestra historia que, como recordaba Gramsci a propósito de los procesos de revolución pasiva, tuvo como «impulso renovador» no el desarrollo económico local, sino ser fundamentalmente el reflejo del desarrollo internacional que «manda a la periferia sus corrientes ideológicas»¹². Los procesos de modernización aquí verificados, que contribuyeron a consolidar la tendencia a la «occidentalización», incrementaron simultáneamente formaciones sociales cuyas prácticas de clase fueron histórica y estructuralmente limitadas por la situación de dependencia. La hipótesis de la revolución pasiva, pensada en su potencialidad conceptual para explicar la dimensión política de los procesos de modernización, dialoga, por lo tanto, con la ya consagrada noción de «revolución burguesa en países dependientes»¹³, buscando evaluar, teórica y políticamente, las complejas situaciones de lucha social y política.

Partiendo de las consideraciones hasta aquí formuladas a propósito de la experiencia histórica latinoamericana, se puede subrayar como uno de sus componentes fundamentales desde el punto de vis-

¹¹ ARICÓ, J.: *La Cola del Diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1988, pp. 87-88.

¹² *Ibid.*, p. 97.

¹³ CARDOSO, F.: *Autoritarismo e Democratização*, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1975, cap. III, pp. 99-134.

ta del proceso de emancipación política, la ausencia de iniciativa autónoma de una clase dominante nacional. Por ello, el Estado terminó asumiendo una funcionalidad específica en el contexto latinoamericano ya que operó como una especie de Estado «puro» animando a la sociedad a cambios y «fabricando, desde arriba, a la clase dirigente»¹⁴. Además de ese aspecto, otras dos marcas de la revolución pasiva se pueden detectar en América Latina: «una autonomía considerable de la esfera ideológica y una evidente incapacidad de auto-constitución de la sociedad»¹⁵.

Para comprender tales procesos de imposición de la modernización capitalista, se debería tener en cuenta de acuerdo con Gramsci que «el impulso para la renovación puede darse por la combinación de fuerzas progresistas escasas e insuficientes en sí mismas (a pesar de su elevadísimo potencial, porque representan el futuro de su país) en una situación internacional favorable a su expansión y victoria». De este modo, «cuando el impulso del progreso no se encuentra íntimamente vinculado a un vasto desarrollo económico local que es artificialmente limitado y reprimido, pero que es el reflejo del desarrollo internacional que *manda a la periferia sus corrientes ideológicas*, nacidas sobre la base del desarrollo productivo de los países más avanzados; entonces, el grupo portador de las nuevas ideas no es el grupo económico, sino los intelectuales, y la concepción de Estado de la cual hacen propaganda muda de aspecto: éste es concebido como una cosa en sí, como un absoluto racional»¹⁶.

La preocupación sería, de este modo, comprender los nexos que vinculan economía y política y, por lo tanto, el lugar del Estado en los procesos de afirmación de la modernización capitalista que conformaron históricamente procesos de transformación real de la sociedad, mucho menos obvios que aquel que se volvería el clásico ejemplo de «revolución activa», la Revolución Francesa de 1789. En su acepción gramsciana, el concepto de revolución pasiva alude, originariamente, a transformaciones históricas ocurridas a partir del siglo XIX, bajo el impacto del despliegue de la Revolución Francesa de 1789. Esta categoría, orientada a la comprensión de procesos de imposición capitalista donde no ocurrieron o fracasaron revoluciones

¹⁴ ARICÓ, J.: *La Cola del Diablo...*, op. cit., p. 91.

¹⁵ *Ibid.*, p. 96.

¹⁶ Citado por ARICÓ, J.: *La Cola del Diablo...*, op. cit., p. 99.

político-sociales o utilizada para comprender las dinámicas político-sociales que se desprenden de procesos revolucionarios que perdieron o enfriaron este carácter, asume, como afirma Gramsci, el estatus más general de un criterio de interpretación en el análisis «de cualquier época compleja de transformaciones históricas»¹⁷. Comprendida como un *criterio de interpretación*, la revolución pasiva permite pensar procesos bastante diversos de construcción estatal y de modernización capitalista, lo que implica su comprobación por medio del análisis histórico.

De acuerdo con Luisa Mangoni, la epistemología gramsciana de la «revolución sin revolución» tiende a individualizar un procedimiento metodológico circular, es decir, «de un fenómeno definido como un paradigma interpretativo más general que a su vez debe ser verificado concretamente a la luz de específicas ejemplificaciones históricas». Suponer, como se afirmó anteriormente, que el caso ejemplar de *revolución pasiva* es aquel en el que se da «una combinación de fuerzas progresistas escasas e insuficientes por sí mismas [...] con una situación internacional favorable a su expansión y victoria», implica trabajar con la idea de que, por ejemplo, «la compleja realidad política que está contenida en la “expresión metafórica” de la Restauración no puede ser leída como puro proceso de conservación, en la medida en que por detrás del aparente inmovilismo de una envoltura política lo que ocurre en realidad es una transformación molecular de las “relaciones sociales fundamentales”»¹⁸. La revolución pasiva, «una construcción lingüística intencionalmente paradójica», no puede ser vista, por lo tanto, como una reacción integral al cambio social, definido éste más adecuadamente como una «contrarrevolución»¹⁹. La metáfora de la Restauración, referida al periodo posterior a la caída de Napoleón Bonaparte y que implicó el restablecimiento de la monarquías en Europa, esconde a primera vista su verdadera naturaleza de «evolución reformista» en la cual lo fundamental es la «transformación molecular» que se encausa²⁰. De esta forma, esencialmente, la

¹⁷ GRAMSCI, A.: *Cadernos do Cárcere*, vol. 5, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002, p. 331.

¹⁸ MANGONI, L.: «Rivoluzione Passiva», en ANDERSON, P., et al.: *Antonio Gramsci: le sue idee nel nostro tempo*, Roma, Editrice L'Unità, 1987, pp. 129-130.

¹⁹ WERNECK VIANNA, L.: *A revolução passiva*, Río de Janeiro, Revan, 1997, p. 70.

²⁰ DE FELICE, F.: «Revolução Passiva, fascismo, americanismo em Gramsci», en VVAA: *Política e História em Gramsci*, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978.

revolución pasiva expresa una combinación entre continuidad y cambio o una dialéctica entre conservación y renovación. En un proceso de esta naturaleza, el conjunto de la sociedad es afectado por la modernización, como un proceso de cambio estructural sin que haya una transformación político-social de carácter radical. Analíticamente, la revolución pasiva se refiere, por lo tanto, a situaciones en las que las soluciones son dirigidas «desde arriba», donde el Estado y el grupo de intelectuales vinculado a él ejercen un papel preponderante, ya que actúan en sustitución de una burguesía estructuralmente débil en la transición del momento económico-corporativo al ético-político, o sea, en la construcción y consolidación del Estado moderno. El tipo de acuerdo político eventualmente firmado (formalmente o no) entre fracciones de las clases dominantes, más avanzadas o atrasadas desde el punto de vista económico, o incluso con otros sectores o grupos sociales (como las clases medias), así como la ausencia o no de una alianza con las masas populares, la insuficiencia de la reforma intelectual y moral o el grado de frustración en el proceso de afirmación de una voluntad nacional-popular, a la manera jacobina, transformadora del aparato estatal, son elementos que componen analíticamente el concepto y que necesitan de la verificación caso por caso para que se puedan cotejar los resultados y las posibles alternativas que existían frente a los sujetos históricos.

Si es correcto afirmar que la revolución pasiva se refiere históricamente a procesos diferenciados de formación, consolidación y defensa del bloque histórico de la sociedad capitalista, es decir, a procesos a través de los que «el grupo económico portador de la función productiva alcanza su elaboración superior, fundando un nuevo tipo de Estado, desarrollando un complejo de estructuras nuevas» para dar soporte a la «expansión generalizada de una nueva sociedad civil»²¹, también es importante resaltar que el concepto de revolución pasiva posibilita la capacidad de ampliar el análisis histórico de la «forma política que permite al capital conservar el poder», o sea, del «reformismo preventivo de los Estados modernos»²². En otros términos se puede decir, sintéticamente, que la revolución pasiva alude a los procesos históricos de formación de los Estados nacionales y también a la

²¹ Cf. KANOSSI, D., y MENA, J.: *La Revolución Pasiva: una lectura de los Cuadernos de la Cárcel*, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1985, pp. 125-126.

²² *Ibid.*, p. 109.

etapa de crisis burguesa siguiente a su consolidación originaria que demandará la intervención del Estado en la absorción de la crisis y la regulación de la función productiva²³.

Aceptando que el criterio de revolución pasiva sirve para pensar la generalización del predominio de la burguesía, no sólo el caso francés pasa a ser visto como «atípico», sino que se une a los países rezagados en este proceso como Alemania e Italia nada más ni menos que la propia Inglaterra. En esta clave de lectura, la revolución pasiva no puede ser vista como un fenómeno que se atiene solamente a países rezagados. En otros términos, la revolución pasiva no puede ser tomada exclusivamente como un criterio de interpretación del paso de «orienté» a «occidente» por la vía de la modernización, aunque sea completamente pertinente su utilización para comprender procesos de modernización o de «occidentalización». De este modo, la revolución pasiva podría ser confirmada en «el hecho de que se transforma la estructura económica, por la vía de la reforma, desde el predominio de la iniciativa privada a la economía planificada»²⁴, e indicando la «necesidad inmanente de llegar a la organización de una economía programada», dirigida ya sea por la política, ya sea por el Estado en su *trama privada*, ejemplificado en el modelo norteamericano. Tiene lugar, de esta forma, una operación sutil de ampliación del concepto con el objetivo de recoger los cambios que se produjeron históricamente, pasando a ser un intento de aprehensión de las *formas* por las cuales se procesó la metamorfosis «de los sujetos sociales dominantes», con lo que la revolución pasiva alude políticamente al *modo de ser* de los «individuos dominantes»²⁵. Se avanza, de este modo, hacia la posibilidad de observar y comprender no solamente las *modalidades* de tránsito a lo moderno, sino también las *modalidades* de repro-

²³ Como afirma Remo Bodei, «en todos los lugares, de hecho, asistimos a revoluciones pasivas, en Europa y en América, tentativas de racionalización de la economía y del control del consenso»; en relación con Italia, Bodei llega a afirmar la existencia de «una serie continua de revoluciones pasivas»; cf. BODEI, R.: «Gramsci: vontade, hegemonia, racionalização», en VVAA: *Política e História em Gramsci*, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, pp. 104 y 106.

²⁴ GRAMSCI, A.: *Cadernos do Cárcere*, op. cit., vol. 1, p. 299. Véanse también los comentarios referentes a ese argumento de Gramsci en los textos de Bodei e De Felice ya citados en VVAA: *Política e História em Gramsci...*, op. cit., pp. 106 y 211, respectivamente.

²⁵ DE FELICE, F.: «Revolução Passiva, fascismo, americanismo em Gramsci», en VVAA: *Política e História...* op. cit., p. 194.

ducción de la dominación *bajo lo moderno*; en definitiva, las *modalidades de revolución pasiva*.

Las gradaciones en el proceso de ingreso y consolidación del predominio burgués establecidas por Gramsci en Italia, Alemania e Inglaterra son esclarecedoras. No se trata solamente de establecer una distinción entre los procesos de alteración del orden tradicional sin tener en cuenta la lucha política y la conquista del poder ya que, para Gramsci, Italia se configura como el proceso más *atrasado* de revolución pasiva, en comparación con los otros dos países, porque es ahí donde la burguesía se mostró más débil y el jacobinismo más ausente. «Es la mayor o menor presencia activa del portador de la *antítesis*, aunque derrotado, lo que singulariza una forma atrasada de una forma avanzada» de revolución pasiva, como resume con claridad Luis Werneck Vianna²⁶. En esta comparación, Alemania representaría un proceso intermedio, de presencia activa aunque de frustración del elemento jacobino, e Inglaterra, con su «transformismo ininterrumpido», la más avanzada modalidad de revolución pasiva, ya que el jacobinismo se afirmó como parte constitutiva de los orígenes de la historia moderna británica.

De todos modos, desde la visión de Gramsci, la versión más atrasada de revolución pasiva no se configura como capaz de impedir que la hegemonía burguesa se realice introduciendo elementos de «progreso» en la formación social. Fruto de la situación internacional, el proceso de imposición burguesa y de modernización capitalista se vuelve irrefrenable en sus efectos de irradiación y expansión. En estas circunstancias, en *todas las modalidades* de revolución pasiva el problema radica en saber el *grado, alcance* y por medio de qué *formas* las clases subalternas habrían constreñido su protagonismo histórico. Se puede admitir, de este modo, que hay modalidades específicas de revolución pasiva condicionadas o determinadas por el tipo de *acción* alcanzado o conquistado por las clases subalternas. No se trata de la inversión de señales en clave de «anti-revolución pasiva» o, al contrario, de que el actor subalterno, en prospección, asuma para sí la

²⁶ Werneck Vianna afirma que, por esta razón, «la variable-clave en la tipología gramsciana sobre procesos de revolución pasiva está en el elemento jacobino». De esta forma, para Gramsci, «no toda revolución pasiva se cumple con plena asunción de la *antítesis* por la *tesis*: el actor subordinado puede ser activo (o haber sido), sobre todo *debe*, y es su acción la que va cualificar el resultado final como más o menos “atrasado”». WERNECK VIANNA, L.: *A revolução...*, *op. cit.*, pp. 73-74.

revolución pasiva como «programa», como advirtió Gramsci. La comprensión de esta cuestión da muy bien la medida de cómo Gramsci relacionó integralmente historia y política en la construcción de la estrategia de la «guerra de posiciones», que solamente tiene sentido en el interior del concepto de revolución pasiva, en la medida en que, para la concepción de las elites, el proceso de modernización que inexorablemente avanza impone una lógica para que su dominio pueda asegurarse: la lógica de conservar cambiando. Por otro lado, la modernización también conlleva consigo un proceso ineluctable de democratización social que desde el punto de vista de las clases subalternas demanda y demandó una acción política realista en el sentido de «traducir la revolución pasiva» a otro signo: el de hacer que el cambio prepondere sobre la conservación. Esta evaluación posibilitó que Gramsci sistematizara la complejidad que había asumido la sociedad moderna: la revolución pasiva expresaría, simultáneamente, *positividad* «en términos de *proceso*, en la medida en que en su curso, la democratización social, por medio de avances moleculares, se va ampliando» y *negatividad* «porque la acción de las elites se ejerce de modo a “conservar la tesis en la antítesis”»²⁷.

La revolución pasiva chilena y la cultura política del radicalismo

El periodo que se inicia con la victoria electoral del Frente Popular en 1938 forma parte del largo proceso de superación de la forma política de dominación oligárquica y, simultáneamente, de estructuración de un Estado moderno en Chile. De acuerdo con la historiografía, antes que una ruptura, 1938 representó una continuidad con la dinámica de cambio y conservación que había comenzado en 1920. A pesar de esto, los gobiernos radicales constituidos hasta 1952 realizaron, con tensiones y adaptaciones, una obra significativa de configuración de un patrón histórico de desarrollo del capitalismo basado en la democracia liberal representativa, en el estímulo de la industrialización dirigida por el Estado y en la integración social a través de dispositivos de un «Estado de bienestar». Este patrón histórico de modernización capitalista, que combinó y alternó momentos de crisis y desarrollo, dio muestras de su solidez por lo menos hasta mediados

²⁷ *Ibid.*, p. 77.

de la década de 1960, siguiendo vigente hasta la ruptura de 1973. De este modo, comprendemos el periodo que comienza con el Frente Popular como un momento determinado del proceso de afirmación del capitalismo en la sociedad chilena y, al mismo tiempo, como un momento clave del proceso más amplio de modernización, que encuentra en el periodo un impulso sin precedentes cuyos resultados afirman un patrón específico de integración sociopolítica y de identidad nacional.

Sin embargo, el periodo que comienza con el Frente Popular no asumió la apariencia, ni factual ni ideológica, de una «revolución». Cronológicamente anclado en un contexto más amplio de afirmación de la modernización del Estado, iniciado a partir de la década de 1920 y, en el otro extremo, marcado por la negación desde 1960 de los trazos específicos que caracterizan tal dinámica, podemos comprender este periodo como un momento, definitivo y definidor, de lo que entendemos como un proceso de «revolución pasiva», que caracterizó la trayectoria específica de modernización vivida por Chile.

En el punto anterior describimos los principales aspectos teóricos que comprenden lo que llamamos aquí «la hipótesis de revolución pasiva». Como ya se indicó, la historia de la modernización de las sociedades latinoamericanas se muestra como una posibilidad de «universalización» de este principio teórico. Entendemos que en el caso chileno, la «revolución pasiva» no se presenta como arbitraria, pues expresa, en su particularidad como país periférico, esa dinámica histórica de universalización de la modernización, persiguiendo y experimentando en el siglo XX su proceso de «occidentalización». Siguiendo las referencias de Juan Carlos Portantiero²⁸, podemos decir que Chile se configura como una variante singular de lo que este autor llama «occidente periférico y tardío». Singular porque el proceso de revolución pasiva que condujo y afirmó el proceso de su «occidentalización» estuvo marcado por características propias, derivadas principalmente de las alternativas políticas ocurridas desde la década de 1920 y, especialmente, desde 1938, momento a partir del cual los elementos de «restauración» siempre condicionaron, y a veces obstaculizaron, los elementos de «renovación» de las estructuras sociales y políticas del país.

Frente a una visión cristalizada que caracterizó la historiografía chilena durante mucho tiempo, consagrando la imagen de una tra-

²⁸ PORTANTIERO, J. C.: *Los usos de Gramsci*, Buenos Aires, Folios Editores, 1983.

yectoria «pura de republicanismo» o lineal de democracia política, la construcción del Estado chileno estuvo marcada, como enfatizó Gabriel Salazar, por un alto grado de «ilegitimidad» y de ausencia de hegemonía, con respecto a los momentos de fundación y refundación del orden. Esta «ilegitimidad» hizo que la presencia militar sobrevolara como un espectro en todos los momentos decisivos de reconstrucción de los pactos de poder, aunque los militares no se hubieran conformado como un actor político de significación en la conducción directa del Estado, a excepción de la experiencia de 1973.

De acuerdo con Gabriel Salazar, todas las Constituciones del país (1833, 1925 y 1980) fueron impuestas (promulgadas o «plebiscitadas») en circunstancias compulsivas y tensas, «sin la deliberación de la ciudadanía». En las coyunturas definidoras de estos procesos, todos aquellos que lucharon por un «proyecto alternativo» de orden fueron invariablemente reprimidos, excluidos y/o descalificados, individual o colectivamente. Todos estos procesos políticos fueron definidos por un «Comité de Notables» que, además de no considerar la cuestión social y de atraso económico como fundamentos legítimos para la construcción del orden, elaboraron «un modelo de Estado estrictamente político (ni social, ni económico) y restrictivamente liberal (no corporativo ni socialista)». A esto se suma que la consolidación y el funcionamiento del Estado dependió siempre del mantenimiento de un grado de exclusión (formal, con respecto a la representación y, a veces, físico o ideológico), como también de ocultación de la ilegitimidad de su origen. Finalmente, se desarrolla en esta trayectoria histórica de larga duración una dinámica de alternancia entre presidencialismo (etapa fundadora) y parlamentarismo (etapa madura), obedeciendo a los dictámenes de integración en el mercado mundial y afirmándose a través del control más estricto de las clases populares y de su rebeldía. De esta manera, concluye Salazar, todos los problemas de la sociedad pudieron «resolverse de un modo puramente técnico y sincrónico, es decir, ajustando los mecanismos internos del propio Estado»²⁹. Historia política sin rupturas, con fuertes rasgos de conservadurismo en el orden político-social, de renovación controlada en la que «los grandes ausentes del proceso formal de construcción y reconstrucción del Estado» fueron «la

²⁹ SALAZAR, G.: «Construcción de Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad», *Proposiciones*, 24 (1994), Santiago, SUR, pp. 92-110.

masa ciudadana y los movimientos sociales-populares»³⁰. A partir de esta interpretación de carácter general, nuestra perspectiva es la de calificar analíticamente el momento específico de desenlace de la modernización del Estado chileno tras la superación del modelo político de dominio oligárquico. Como vimos, ese proceso siguió su curso y encontró su «resolución» con el ascenso del Frente Popular al poder en 1938. Desde la victoria de estos actores políticos de 1938, Chile experimentaría su *modalidad específica de revolución pasiva*, en la que, otra vez, el Estado figuraría «como un absoluto racional». Nos importa, entonces, la *modalidad moderna de la revolución pasiva chilena*, alejándonos tanto de su momento fundador como de su dimensión de larga duración.

Históricamente, el periodo de crisis oligárquica había sido precedido por intensas luchas sociales del proletariado chileno. Con el ascenso del Frente Popular en 1938, las fuerzas representativas del proletariado se integraron definitivamente en el sistema político pasando incluso a formar parte del sistema. Para Norbert Lechner, esta etapa representó el paso del conflicto de clase abierto al conflicto de clase institucionalizado³¹. La aproximación al poder del movimiento obrero significó, por lo tanto, su ingreso en el sistema político y se superó, de este modo, la etapa autocrática del periodo de Ibáñez (1927-1931), así como el inmovilismo político del segundo gobierno de Alessandri (1932-1938).

Si el ascenso de los partidos de izquierda al poder en coalición con los radicales implicó la progresiva consideración de las demandas populares más inmediatas, imprimió, por otro lado, una relativa reducción de la lucha por sus proyectos estratégicos. De hecho, a partir del Frente Popular, el movimiento obrero no postulará la construcción del socialismo como tarea inmediata y su activismo sindical, aunque no se hubiera transformado completamente en sindicalismo oficial, pasó a ser abiertamente proestatal³². En este sentido, desde 1938, el orden social puede legitimarse de una manera más moderna y el Estado pasa a concretarse como una relación social legitimada más por mecanismos de incorporación e integración que por la sim-

³⁰ *Ibid.*

³¹ LECHNER, N.: *La democracia en Chile*, Buenos Aires, Ediciones Signos, 1970.

³² PIZARRO, C.: *La huelga obrera en Chile, 1890-1970*, Santiago, SUR, 1986; BERGQUIST, Ch.: *Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios Comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia*, Bogotá, Siglo XXI, 1988.

ple coerción. Esa operación definiría el curso de la «occidentalización» del país.

De este modo, hubo en Chile una *solución peculiar* tanto para el conflicto de clase abierto entre el proletariado y las clases dominantes como para la crisis interna del poder oligárquico. En relación con el primer aspecto, es importante recordar que la institucionalización del conflicto fue posible a partir de la aplicación de la Carta Constitucional de 1925 y del Código de Trabajo, aprobado en el segundo periodo de Alessandri, inmediatamente después de la derrota de la Asamblea de Trabajadores e Intelectuales, un movimiento específico que buscaba interferir en el proceso constitucional previo a 1925. Con respecto a la crisis oligárquica, se dio una verdadera *simbiosis* de las elites dominantes. De acuerdo con María Rosario Stabili, la clase dominante «constituida por un núcleo central compuesto por la vieja oligarquía de la segunda mitad del siglo pasado, diversificada económicamente y aumentada, por asociación con elementos más dinámicos de la sociedad» conservó «inalteradas las formas sociales anteriores». El estilo de vida, los comportamientos y las normas que pautaban al grupo eran sustancialmente los mismos, heredados de generación en generación, con el objetivo de garantizar su continuidad, basada en la adhesión a un modelo cultural determinado por la tradición. Este estilo «aristocratizante» sufrirá alteraciones sólo en virtud de la crisis de los años 1930 y de los cambios que se dieron en Europa, junto a la influencia creciente del «modo de ser norteamericano»³³.

Esta solución peculiar, por sus características propias de «innovación», sin rupturas en el plano del orden político y de «conservación social» determinó la construcción de un «consenso» igualmente singular: democrático en el plano formal y participativo para los sectores organizados de la sociedad pero radicado fundamentalmente en la sociedad política. Un consenso completamente dependiente de la mediación de los aparatos e instituciones representativas. De este modo, sin distanciarse de sus intereses específicos y sin dejar de expresarse abiertamente en sus conflictos, la sociedad civil pasó a reproducirse por medio de mecanismos de representación del Estado (dimensión corporativa) y de las estructuras compensatorias determinadas dentro del sistema político. Como observó Leopoldo Benavi-

³³ Citado por DE RAMÓN, A.: *Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana*, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 262-263.

des, el proceso definido en Chile como institucionalización del conflicto mostraba solamente que la democratización había pasado a ser, en realidad, el medio por el cual se expresaba la crisis de hegemonía de la clase dirigente y, simultáneamente, la evidencia formal de la fragilidad del consentimiento de las clases dirigidas. Lo paradójico es que, según Benavides, este «consenso se establece, precisamente, sobre la base de su no-existencia que es la manera por la cual la clase dominante pretende recomponer su hegemonía, determinada en gran medida por la correlación de fuerzas sociales y políticas»³⁴.

El Estado que emerge de esta construcción ya no es más un «Estado oligárquico», *sensu stricto*, ni tampoco un «Estado oligárquico-burgués»³⁵, en virtud de la fragilidad de los segmentos empresariales vinculados específicamente a la industrialización. La composición de alianzas sociales para el mantenimiento de este tipo de Estado, o esta solución de «equilibrio orgánico», fue bastante compleja y dependió tanto de una sistematización coherente de estrategias de crecimiento económico como factor de legitimación, como de una inmensa capacidad de articulación política entre las fuerzas sociales.

Por esta razón entendemos como problemática la calificación conclusiva de Tomás Moulian de «reformismo incompleto» o «inorgánico» para el periodo que comienza con el ascenso al poder del Frente Popular. No sin razón, ya que forma parte de su lógica interna, esta interpretación rechaza terminantemente la calificación de revolución pasiva para el periodo, aunque reconozca la existencia en este proceso de una izquierda inclinada a realizar una «revolución democrático-burguesa» de matriz singular: una forma *sui generis* que no iba por el camino violento sino por una *modalidad pasiva* de revolución desde arriba en los límites de un régimen de compromiso interclasista³⁶. El argumento de Moulian, en este sentido, es que los gobiernos de centro-izquierda del periodo promovieron «el crecimiento industrial» pero no produjeron una «revolución capitalista»; generaron una

³⁴ BENAVIDES, L.: *La democratización y el desarrollo en el Proyecto Popular. Chile 1890-1970*, Santiago de Chile, FLACSO, 1982, p. 20.

³⁵ Véase la crítica a esta formulación en FALETTO, E.: «Clases, crisis política y el problema del socialismo en Chile», en ZENTENO, R. B. (coord.): *Clases Sociales y crisis política en América Latina*, México, Siglo XXI, 1977.

³⁶ MOULIAN, T.: «Violencia, gradualismo y reformas en el desarrollo político chileno», en VVAA: *Estudios sobre el sistema de partidos en Chile*, Santiago de Chile, FLACSO, 1985.

mayor democratización de oportunidades pero no una «revolución democrática»³⁷.

Aunque comprendemos que la historia factual puede ser el sustento de este argumento, nos parece que si supusiéramos que el Frente Popular y los sucesivos gobiernos de coalición de centro-izquierda hubieran realizado ambas «revoluciones» estaríamos, entonces, dentro del esquema más clásico de una revolución burguesa. No hay, como vimos, posibilidad de suponer, en virtud de lo que se dio históricamente en Chile a partir de la crisis oligárquica, un «activismo revolucionario» en estas dos dimensiones. Por otro lado, el rechazo de la identificación de esta etapa como revolución pasiva se configura, según nuestro punto de vista, como un procedimiento analítico que impide cualquier evaluación a propósito de la naturaleza estructural y del sentido histórico del reformismo de aquellos gobiernos. Equivocadamente, este rechazo asegura, sin embargo, otra solución al enigma chileno. En consonancia con los calificativos de «reformismo inorgánico» o «incompleto», la singularidad de Chile estaría en haber vivido una forma peculiar de construcción del capitalismo marcado por la «ausencia de una revolución burguesa, de carácter activo o pasivo». Esto habría sido el resultado, según Moulian, de la combinación de industrialización y democratización, típica del caso chileno, sin solución de los problemas básicos de la dependencia, del atraso agrario y de la igualdad de la sociedad en sentido burgués, lo que abarcaría fundamentalmente el tema de la liberación del mercado, tanto a nivel interno como externo. La oportunidad de una revolución pasiva, también de acuerdo con Moulian, habría sido desaprovechada por las clases dominantes desde 1947 cuando se restringió fuertemente el sistema de representación con la exclusión de los comunistas. Este hecho y, con anterioridad, la derrota de Gustavo Ross en 1938 impidieron «que el proceso de industrialización tuviera su énfasis en la modernización burguesa en vez de tintes de modernización democrática»³⁸.

El problema de esta interpretación reside, nos parece, en el hecho de que el periodo que se inicia en 1938 se define como una especie de «paréntesis» en la historia del «reformismo social chileno»³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Cf. MOULIAN, T.: *La forja de ilusiones...*, *op. cit.*, pp. 100-102.

³⁹ Estamos admitiendo aquí la hipótesis de que es posible sustentar que la práctica reivindicativa de las clases populares a fines del siglo XIX y principios del siglo XX,

que encontraría sólo más adelante, en el gobierno de la Democracia Cristiana de 1964 y, en parte, en el gobierno de la Unidad Popular de 1970, su supuesta completitud y organicidad aunque frustrada por otras razones. Si hubo, de hecho, «tareas postergadas» por los gobiernos que siguieron al del frente Popular, tanto relativas a la modernización económica como a la democratización, entendemos que no se puede negar la existencia en este periodo de un proceso de afirmación de un patrón histórico de desarrollo del capitalismo compartido simultáneamente por los principales actores políticos y sociales.

Por lo tanto, nos parece que lo más importante para el análisis del periodo consiste en la construcción de una explicación más convincente y consonante con los hechos relacionados con la modernización emprendida por el Estado y con la democratización social. Esta explicación debe dilucidar, *afirmativamente*, las razones por las cuales dicho periodo asumió la apariencia de un proceso de modernización en el que un determinado segmento político, externo socialmente a las clases fundamentales, al llegar al poder se calificó y consiguió dirigir la modernización, operando a partir de una «racionalidad propia», sustituyendo a las clases dominantes. Se trata de explicar por qué la izquierda que se alió con el centro político en aquel proceso, independientemente de sus intenciones estratégicas y de su retórica, terminó asumiendo aquella «modalidad pasiva» aunque sin asimilarla integralmente como su «programa». No hay ninguna razón para que, a partir de la tesis de la «sustitución», se cancele la hipótesis de que las coaliciones articuladas por los Radicales hayan representado un nuevo modo de relación con las clases propietarias, en general, y con la burguesía industrial, en particular. En realidad, desde estas clases se impuso una forma de realización de la modernización capitalista que, como vimos, pasará a tener en el Estado un elemento vital de acción, pero que por las imposiciones de las circunstancias políticas que llevaron a la victoria de 1938, también afirmará en el Estado una tendencia de democratización social limitada pautada por el gradualismo. La categoría de sustitución expresa, en nuestra opinión, una dimensión de fragilidad de esta modalidad de revolución pasiva, ya que el Partido Radical, al sustituir un «bloque histórico» de clases tra-

especialmente aquella de donde nace el Partido Obrero Socialista, pueda ser pensada como una experiencia de reformismo social.

dicionales y modernas, se vio obligado a responder, simultánea y estratégicamente, al impulso modernizador y a las sanciones que provenían de este bloque.

Esta especie de «revolución desde arriba y de carácter democratizador», especialmente en su dimensión social y en función del peso que pasaron a tener los sectores organizados de las clases subalternas a través de la representación de los partidos de izquierda, organizó la formación social «como un híbrido de estancamiento y modernidad» como acertadamente observó Moulian⁴⁰. A pesar de esto, los resultados no pueden ser considerados como despreciables respecto a la situación anterior de desfase entre el desempeño económico y la respuesta a las demandas sociales. Como observó Aníbal Pinto, en comparación con las etapas anteriores, «se podría decir que [...] hay aquí una consonancia entre transformaciones sucedidas a nivel socio-político y las que se hacen efectivas en la base económica»⁴¹.

La arquitectura política montada en este periodo no fue, por lo tanto, nada despreciable. La mencionada «sustitución» no actuó en el sentido de eliminar a las clases dominantes. Se realizó sin alterar el predominio de los sectores burgueses en el plano económico y el de los proletarios rurales en el plano político e ideológico, inclusive después del impulso de la industrialización. Sin embargo, posibilitó por primera vez que la «clase política civil» pasara a representar los intereses de los movimientos sociales de cada corporación en particular y, al mismo tiempo, pasara a poner en práctica una política estructural de desarrollo global, como fruto de una «economía programada», según un «plan» basado en la idea de erigir en el país un «Estado-empresa». Como señaló Salazar, «los movimientos sociales fueron llamados a incorporarse responsablemente a la tarea “nacional” del desarrollo estructural, definiéndoseles una participación *completamente pasiva*, como segmento de clientes»⁴².

Un proceso con estas características necesitó de la legitimación operativa y funcional de un actor político que, al mismo tiempo, pudo constituirse durante este periodo en el corazón de la «clase civil política», ya que era imprescindible para este actor asumir la «etapa matizada» de respuesta a los movimientos sociales que se dispusieron táci-

⁴⁰ MOULIAN, T.: *La forja de ilusiones...*, *op. cit.*

⁴¹ PINTO, A.: *Chile, un caso de desarrollo frustrado*, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1973, p. 313.

⁴² SALAZAR, G.: «Lo social...», *op. cit.*, p. 195 (la cursiva es nuestra).

tamente a participar teniendo como referente «una lógica de equilibrio, de conjunto y de “estructura”: es decir, nacional»⁴³.

Este actor no fue, en virtud de la naturaleza de la composición social de fuerzas, la coalición de centro-izquierda del Frente Popular que venció en 1938, ni tampoco las coaliciones de naturaleza similar, aunque mitigada, que gobernaron el país hasta 1947. Era y fue imposible mantener al Frente Popular como el actor de la revolución pasiva en Chile. No sin razón, la denominación de las alianzas político-electorales para disputar la presidencia de la República constituidas después del Frente Popular señalaron más la perspectiva «nacional» que la «popular». De todos modos, el Partido Radical, núcleo de todas estas coaliciones y fuerza política gobernante hasta 1952, fue el que se constituyó como actor fundamental de este proceso. La izquierda aliada con los radicales, o una parte de ella, no asumió la revolución pasiva como un «programa», porque otro actor político lo hacía ante su integral dominio político en las coaliciones y en los gobiernos que dirigió.

El Partido Radical fue quien fijó, desde 1938, un nuevo nexo entre economía y política para que se llevara a cabo aquel tipo de desarrollo del capitalismo. Se constituyó a través de la «sustitución» de las clases dominantes y de su entronización como núcleo de la «clase política civil» en el corazón de la nueva clase dirigente. Su fuerza residía en la ausencia de vocación hegemónica de las elites económicas y, en otro sentido, en la percepción que reveló de la función fundamental que estas elites tenían en la conservación y reproducción del orden social. Por otro lado, el Partido Radical fue capaz también de incorporar selectivamente a los actores subalternos con una relativa tranquilidad, ya que el movimiento social de estas clases se pautaba mucho más por una «acción programática de aceptación de la continuidad», actuando políticamente sobre la base de una visión a «largo plazo» que buscaba romper el sistema «por dentro», lo que generó para estos movimientos un grado apreciable, coherente y sistemático de elaboración teórica para hacer frente a la política de inserción subalterna dirigida por los radicales⁴⁴.

Fue el Partido Radical, como centro de la política chilena desde la victoria electoral de 1938, quien condujo el proceso de continuidad

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ BENAVIDES, L.: *La democratización...*, *op. cit.*, p. 52.

de la superación de la forma política de dominación oligárquica. Fue el radicalismo chileno quien posibilitó y, al mismo tiempo, condicionó la inclusión de las clases subalternas en el sistema establecido. Fue el que configuró el equilibrio central del sistema político o «arreglo democrático chileno», siempre moderado, pragmático y estatalista. *El Partido Radical fue, así, el partido de la revolución pasiva chilena* e hizo de ella su «programa». Por su representatividad política y fuerza social y por su presencia estratégica en el sistema político, la «restauración» no pudo prevalecer. La incorporación de los movimientos sociales y de la izquierda al sistema del orden excluyó, a su vez, la posibilidad inmediata de una «revolución desde abajo».

El predominio de los Radicales en este proceso terminó evidenciando tanto el desplazamiento de las clases dominantes del poder político como la exacerbación del papel dirigente asumido por el Estado. La composición social del «grupo dirigente» del Partido Radical que ascendió a las funciones gubernativas básicamente vinculadas a los sectores medios de corte burocrático, hizo que este partido concentrase por completo el «momento orgánico» de su acción política estatal no en la conducción de «hombres y cosas», como en el mundo empresarial, sino en su capacidad de mando «político». Asumió esa facultad auto-legitimada, ya que su intención deliberada era impedir o eliminar (políticamente) «la agudización de la lucha de clases fundamentalmente a través de una acción destinada a obtener la igualdad económica y política de todos los sectores». No sin razón, por lo tanto, la lógica del movimiento de los Radicales en este proceso fue la de confundir «Estado-clase» con «sociedad regulada»⁴⁵, lo que explica todo el comportamiento zigzagueante de este partido a pesar de la coherencia de sus acciones, teniendo en cuenta el sentido histórico preciso que asumió su función como actor del gobierno.

La revolución de imposición moderna del capitalismo fue pasiva en Chile, pero su modalidad no fue la de la «vía prusiana» en la que el «atraso» conduce a lo «moderno». El ascenso del Frente Popular al poder canceló esta alternativa así como, a través de la institucionalización del conflicto, canceló la posibilidad de que el activismo de masas se transformara en una revolución obrera y popular. La «occidentalización» obrera fue, de este modo, una obra de imposición de

⁴⁵ GRAMSCI, A.: *Maquiavel, a Política e o Estado Moderno*, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 1976, p. 145.

lo «moderno» por medio de la dinámica de la *política*, encontrando ésta su legitimidad en el interior de la formalidad democrática. Sin embargo, quien condujo esa imposición no fue una expresión política típica de las clases propietarias a través de la transformación del Estado en su «partido político». Fueron, como vimos, las coaliciones políticas hegemónicas por los Radicales cuyos temas principales eran el desarrollo industrial y la integración social, el nexo estructural y nacional entre economía y política. En este nuevo contexto, el espacio para las demandas de las clases subalternas, especialmente las obreras y urbanas, fue franqueado por las instituciones del Estado, pero imponiendo la pasividad clientelar y corporativa a los movimientos sociales y la del cálculo político a sus representaciones político-partidarias. De este nexo derivaría la posterior y permanente lucha por la democratización de la sociedad, como la ineluctable característica del «plan» y del «principio estatal» en la acción gubernativa que caracterizará al ulterior reformismo chileno, tanto de la Democracia Cristiana como de la Unidad Popular.

Sin embargo, es necesario registrar que la modalidad específica de revolución pasiva de Chile asignaba un determinado activismo a los actores subalternos. Sus representaciones políticas formaron parte de las coaliciones gobernantes, imponiendo la necesidad de ampliación del Estado no solamente en su dimensión económica sino también social. En cierto sentido, como desarrollamos en el punto anterior, tal vez se pueda decir que, como en Inglaterra, se trata de una revolución pasiva «avanzada», siendo considerada como muy significativa la particularidad chilena de incorporación selectiva de los intereses subalternos y del avance de los derechos sociales, en comparación con los demás países latinoamericanos. En virtud de esta circunstancia se comprende el hecho de que el tema de las reformas se haya vuelto tan recurrente en la trayectoria de la izquierda chilena.

Actualizado en un proceso histórico y político de esta naturaleza, el mundo capitalista no pudo imponerse en toda su plenitud y autonomía. Se afirmó como norma por medio de la mediación política en un contexto de democracia formal. La intervención del Estado, sin embargo, no consiguió anular el momento tardío en que se hacía efectivo ese proceso de «occidentalización». Industrialización, cuestión agraria, modernización, autonomía nacional, democratización integral, todo quedó a medio camino y *se hizo efectivo sin completarse*, un cuadro típico de revolución pasiva.

La particularidad del caso chileno reside, por lo tanto, en una modalidad específica de revolución pasiva que no se confunde con la modalidad «prusiana» y no puede ser tampoco comparada con modalidades que se afirman a partir de la hegemonía privada del mundo del capital. Al contrario, carga el peso de la tradición y tensa su relación con ese mundo a partir de una situación determinada de poder que hace que estos elementos busquen, de alguna manera, su «aggiornamento». En dicho caso, la ecuación «revolución-restauración» obedeció a trazos singulares para realizar lo que le es característico: «cambiar para que nada cambie». Las fuerzas sociales tradicionales o «renovadas» de las clases propietarias, por la acción parlamentaria o corporativa, controlaron permanentemente el curso del proceso de «occidentalización», impusieron límites e influyeron en su ritmo, especialmente en lo que se refiere a las pautas de democratización general de la sociedad.

El «programa» de revolución pasiva, realmente, contempló sus demandas inmediatas pero la política seguida por los gobiernos radicales no se constituyó en expresión de la forma en que las élites dominantes pensaban conformar al país. Por otro lado, ni siquiera la victoria del Frente Popular de 1938 y sus primeros años de gobierno pueden ser considerados como un ascenso tempestuoso de las clases subalternas al poder del Estado, con subsiguientes radicalizaciones de sus demandas de democracia social y económica. Lo que ocurrió estuvo muy lejos de ser una revolución activa o un poder «democrático-popular». Pero también es cierto que, a partir de ese momento, las clases subalternas permanecieron presentes y activas para obtener la satisfacción de sus demandas, facultadas por el sistema de institucionalización de los conflictos. Sintetizando, a pesar de toda la «activación» expresada en la singularidad de la victoria electoral del Frente Popular, lo que en realidad se verificó fue la cristalización del orden. Sobreviene, al contrario de la expectativa de los activistas de izquierda, la inmovilidad de una envoltura política que permitió la ilusión de revuelta y agitación.

De este modo, en contra de los procesos descritos por Lenin como «vía prusiana» o de las modalidades de revolución pasiva que Gramsci sintetizó en la expresión «dictadura sin hegemonía» que, en general, se pautaron por estructuras autocráticas de legitimación del orden, afirmándose más por la «coerción» que por el «consenso», en Chile, por el predominio del Partido Radical, la democracia repre-

sentativa con todas sus imperfecciones se configuró como uno de los elementos centrales de aquella modalidad de revolución pasiva. No pudiendo prevalecer la «restauración» en su sentido fuerte y estricto de tendencia a la rigidez del sistema de representación, el «atraso» no estaría facultado para dirigir la modernización. Por otro lado, lo «moderno» en Chile tampoco saldría a la luz a través de una «ruptura revolucionaria» ya que una revolución virtual democrática envolvió el «programa» de la revolución pasiva conducido por los radicales. En este escenario pudo cristalizarse, así, la fórmula «*democracia sin hegemonía*». Esta invención chilena fue más tarde la base en la izquierda de un *proyecto anunciador* de la vía democrática hacia el socialismo, cuando en 1970 Salvador Allende fue elegido presidente de la República.